

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Závala.*—*José García Ramirez*, secretario.

Escopia que certifico. México, Noviembre 25 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Matamoros, por los Sres. H. Nielssen, Casimiro Castro y otros, contra los actos del Administrador de la Aduana Marítima del mismo puerto que les aseguró unos efectos por pago del impuesto federal llamado derecho de bultos.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que los señores que suscriben el ocurso de fojas dos á cinco, solicitan amparo de los actos del Sr. encargado de la administracion marítima de éste puerto, quien exigiéndoles el derecho de bultos les detuvo, para asegurar las mercancías expresadas con especificacion en la nómina que acompañan y es la conque dá principio este expediente.

La Administracion en su informe confiesa el motivo de la queja: y este Ministerio

al evacuar el traslado, cumple á su deber: reproducir lo alegado y hecho valer en los juicios de amparo promovidos recientemente por los Sres. San Roman y Armendaiz y fallados, el uno el 17 de Julio y el otro el 22 del mismo mes próximo pasado; porque en su concepto no es legal ni debido el que se siga celebrando ese derecho de bultos desde que comenzó á regir el nuevo Arancel, fundado en la vigencia clara, terminante y expresa del artículo primero del decreto de 17 de Marzo de 1858 ó sea la ley 30 de Julio de 1861; en la circular de primero de Enero de 1872 á su fin; en el artículo segundo de los transitorios del Arancel; en el Reglamento de Aduanas, vigente, art. 214; en la ley del presupuesto del año económico vencido el 30 de Julio último, artículos primero y dos, y en los telégramas del Gobierno, revestido de facultades legislativas, de 24 de Setiembre y 4 de Diciembre del año pasado.

Por tanto, en justicia debe fallarse: que la justicia Federal ampara y protege á los Sres. H. Nielssen, Casimiro Castro, Melchor M. Abascal, M. H. Croos, Manuel Rodriguez y las razones sociales de Luis Viscaya y Compañía y Liaño y Barrera, contra los actos del señor encargado de la Administracion marítima y fronteriza de este puerto, quien al importar aquellos para la zona las mercancías amparadas con sus respectivos permisos, les exigió el derecho de bultos y les detuvo efectos para su pago.

H. Matamoros, Agosto 8 de 1873, á las tres y tres cuartos de la tarde.—*Lic. Agustín Menchaca.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

H. Matamoros, Agosto 20 de 1872. Vistos los presentes autos, y en ellos el escrito de fojas 2 en que los Sres. H. Nielssen, Casimiro Castro, M. Abascal, M. H. Croos,

Manuel Rodriguez y las razones sociales de "Luis Vizcaya y Compañía" y "Lleño y Barrera," comerciantes en esta Ciudad, solicitan el amparo de la Justicia Federal, por creer violadas en sus personas las garantías que la Constitución de la República les otorga en sus artículos 16 y 27, con el acto de haberles retenido el C. Administrador de la Aduana Marítima de este Puerto unas mercancías, para asegurar el pago del derecho de bultos que les cobra en la importación de los efectos extranjeros clasificados en la nómina adjunta á fojas 1, cuyo pago resisten los quejosos por reputarlo ilegal y arbitrario; el informe rendido por el funcionario de quien emanó el acto reclamado, con los justificantes que lo acompañan; lo expuesto por el ministerio público al contestar el traslado que se le corrió; los alegatos de las partes y la citación para sentencia.

Considerando: que está vigente el decreto conocido con el nombre de Zona Libre de 17 de Marzo de 1858, aprobado por el de 30 de Julio de 1871 del Congreso de la Union.

Que entre las diversas pruebas que de ello pueden aducirse, ministra una de las mas irrecusables, el novísimo Arancel de aduanas marítimas y fronterizas de 1º de Enero de 1872, y otra su reglamento de la misma fecha; el primero, porque dispone en su artículo segundo de los transitorios, que una ley determinará la que deba regir respecto de importación y consumo de mercancías en los lugares en que actualmente existe la Zona Libre, conforme á la ley de 30 de Julio de 1871; y el segundo, mas explícito aun porque previene en su artículo 214 tambien transitorio, único, que mientras se expide aquella ley "se observará por las aduanas respectivas lo de terminado en la ley de 30 de Julio de 1870, con las modificaciones que se le han hecho con posterioridad.

Que aunque se haya pretendido decir que esta parte final del artículo antes

transcrito supone modificado el decreto de Zona, semejante interpretación es verdaderamente insostenible, como contraria á las reglas gramaticales y opuesta á la realidad de los hechos; lo uno, porque aquel pronombre le, solo puede referirse á la palabra *reglamento* que antecede, y no abarcar tambien las anteriores de Ley de Zona, puesto que para comprender las dos ideas habria tenido que emplearse en la locucion plural de que no se usó: y lo otro, porque si existen y pueden citarse las modificaciones que el Reglamento ha sufrido, ninguna se puede señalar, hasta hoy, del decreto mencionado, por no haberla.

Que de lo expuesto fluyen las siguientes forzosas y exactas consecuencias: Primera: Que el mismo legislador tiene solemnemente reconocida y declarada la vigencia, sin restricciones de la ley de Zona Libre. Segunda: Que con igual solemnidad ha prevenido en términos precisos ó intergiversables, que se observe, y expresamente que se observe por los Administradores de las aduanas respectivas. Tercera: Que ha ordenado que dicha ley rija, interin no se expida la otra que para el futuro ofrece y no ha sancionado todavia. Y cuarta: Que al dejarla en todo su vigor, como la dejó, ella es la que debe consultarse para decidir el punto en cuestion.

Que partiendo de esta base, desde el preámbulo que encabeza dicha ley se ve que su objeto fué proteger el comercio de los pueblos de esta frontera, concediéndoles franquicias para levantarlos de la postración en que se hallaban, con cuyo fin decreta: Artículo primero: Los efectos extranjeros que se destinan al consumo de la ciudad de Matamoros.... Reynosa, Camargo, Mier, Guerrero y Monterey Laredo, y al comercio recíproco de esos mismos pueblos, serán libres de todos derechos, con escepcion de los municipales.....

Que habiéndoles otorgado tan extensa gracia, es quebrantarla, es ir contra la letra y el espíritu del privilegio, cobrar á esos

efectos otros derechos que los municipales, y por consiguiente, cobrarles el de bultos que no admite y que ni siquiera se había establecido en la época en que se expidió la ley de Zona.

Que la Administración marítima confiesa en su informe de fojas 14, "ser cierto que les cobra á los actores el derecho de bultos al importar sus efectos extranjeros mencionados, y ser cierto también, que para caucionar su pago les retuvo parte de ellos, cuyo hecho no puede fundarse en aquella ley con la que se opone abiertamente; escusándose la Administración con decir, que el proceder de esta manera, obedece órdenes superiores, remitiéndose á las que en diversos telégramas le ha comunicado el Ministerio y en copia exhibe.

Que estos telégramas resuelven el de fojas 16 datado el 24 de Setiembre de 72: que no se cobre el derecho de bultos en el acto de la importación á los efectos extranjeros que deban liquidarse conforme al Novísimo Arancel de 1872, sino los municipales solamente, y que el resto de los derechos que hayan de pagar se los cobre hasta la internación, con arreglo á la ley de Zona Libre, repitiendo el 4 de Diciembre: que se cumpla exactamente la anterior resolución, por no ser posible otra cosa" según consta á fojas 21.

Que luego en una larga serie de mensajes posteriores, ya decide el Ministerio que se cobre el cuestionado derecho, dando estas razones en el de 26 de Diciembre que se registra á fojas 27. Primera: Que está refundido pero subsistente en el arancel de 1872. Segunda: Que antes de hallarse esto vigente, ya se cobraba en la Zona. Y tercera: que por lo mismo, mientras no se expida la ley reglamentaria de Zona Libre, es indudable el derecho para exigir ese impuesto, ordenando cuotizarlo á cuatrocientos nueve milésimos por ciento, y que se deduzca á la internación.

Que el Juzgado, meditando con imparcialidad, no ha podido conciliar aquellos te-

légramas con lo que las leyes actuales prescriben, porque de su estudio se desprenden las siguientes conclusiones contra ese cobro del derecho de bultos, como aquí se pretende hacerlo:

Que no pueda él basarse, desde la vigencia del arancel de 1872, ni en el de 1856, ni en decreto de 20 de Noviembre de 1871, que estableció dicho impuesto, porque en el arancel de 1872 se reunieron formando un solo cuerpo, las varias determinaciones respecto del comercio extranjero diseminadas en diferentes leyes, como lo explica la circular que lo acompaña, de 19 de Enero del citado año, en el número quince de su párrafo cuarto, y por lo mismo, quedaron sin regir las procedentes.

Que ninguna aduana pueda hoy hacer figurar entre sus liquidaciones al comercio, partida especial por derecho de bultos, porque el artículo 16 del último arancel determina: "Que las mercancías extranjeras pagarán por único derecho, las cuotas comprendidas en su artículo 18, y las no comprendidas en dichas tarifas, un cincuenta y cinco por ciento sobre su aforo. Siendo muy oportuno recordar aquí, que hablando de las bases que sirvieron para la formación del arancel respecto del derecho de importación, ha dicho el legislador en el párrafo 11 de la propia circular, estas decisivas y textuales palabras: quedan refundidos en ese derecho y dejarán por lo mismo de cobrarse separadamente.... VI Derecho de un peso por bulto de ocho arrobas en sustitución de peage."

Que en los pueblos de la Zona libre, las aduanas no deben exigir á la importación de esos efectos, ni las cuotas de las tarifas, ni el cincuenta y cinco por ciento sobre su aforo, sino solamente los derechos municipales, por hallarse bajo el amparo de una ley especial que así lo manda.

Y que tampoco pueden hacer en dichos pueblos el expresado cobro en la importación, ni para deducirlo en la internación, sino infringiendo el artículo séptimo de la

misma ley particular, á donde previene que: al tiempo de salir los efectos extranjeros de los pueblos agraciados para internarse en la República, será cuando se causen los derechos que los están impuestos por los aranceles.

Que estas disposiciones no pueden tenerse como alteradas por lo que el Ministerio de Hacienda ha resuelto en sus posteriores telegramas, pues para variarlas se requiere la existencia de otra ley que las obligue ó derogue, la que no se halla en el particular.

Que la de 20 de Enero de 1869 dispone en su artículo 28, que los tribunales para fijar el derecho público tendrán como regla suprema de conducta la Constitución federal y las leyes que de ella emanen; y existe reconocido el principio jurídico, de que no basta que la ley sea obligatoria para todos, sino que además es necesario, que los magistrados encargados de aplicar sus disposiciones á los casos que ocurran, no puedan jamás sustraerse al cumplimiento del mandato que se les ha confiado.

Se declara, de conformidad con lo pedido por el ministerio público: que la Justicia Federal ampara á los Sres. H. Nielsén, Casimiro Castro, Melchor M. Abascal, M. H. Croos, Manuel Rodríguez, Luis Vizcaya y Compañía, y Linao y Barrera, contra el acto de la administración marítima de este puerto que para asegurar el pago que separadamente les exige del derecho de bultos en la importación de las mercancías que reza la nómina de fojas una, les retuvo parte de los efectos, resultando así violada la garantía que el código de 57 les concede en su artículo 16, á consecuencia de no aparecer fundada la causa legal del procedimiento.

Notifíquese esta sentencia; publíquese, y con su expediente, elévse á la Suprema Corte de Justicia en revisión. Así definitivamente juzgando y sentenciando, lo proveyó el juez y lo firmó con los de mi existencia. — Doy fé. — *Manuel Mendiola.* — *Fernando F. Mireles.* — *Tomás A. Villarreal.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 27 de 1878. Visto el juicio de amparo promovido por los CC. H. Nielsén, Casimiro Castro, Melchor M. Abascal, M. H. Croos, Manuel Rodríguez, Luis Vizcaya y Compañía y Linao y Barrera, ante el Juzgado de Distrito de Matamoros, contra los actos del Administrador de la Aduana marítima del mismo puerto que les aseguró unos efectos por pago del impuesto federal llamado derecho de bultos, por mercancías importadas por dichos Señores, con cuyo acto reputan violadas los quejosos, las garantías que conceden los artículos 16 y 27 de la Constitución. Visto el informe de la autoridad responsable del acto reclamado; lo pedido por el C. Promotor; lo alegado por los quejosos; la sentencia del inferior y todo lo demás que de autos consta y se tuvo presente, y Considerando: que el derecho de un peso por bulto de ocho arrobas, ó medio centavo por libra es establecido en sustitución del de peages, no fué suprimido por el nuevo arancel de aduanas sino que simplemente ha quedado refundido como otros varios impuestos, en el derecho único de importación que estableció dicho arancel, y bajo cuya nueva forma sigue recaudándose por las oficinas federales en la generalidad de los puertos de la República: Que el repetido derecho de bultos que hasta ahora había sido satisfecho por todas las mercancías que se introducen á los lugares que gozan del beneficio de la Zona libre, sin reclamación de ninguna especie por parte de los importadores, debe seguir recaudándose en esos mismos puntos separadamente y según la manera que determina la ley de su creación, por no ser aplicables ahí las reformas del arancel de 1872, sobre refundición de los diversos derechos aduanales en una sola cuota. Que habiendo quedado subsistente el derecho de bultos, á pesar de las reformas introducidas por el nuevo arancel, la Aduana de Matamoros no

ha hecho mas que cumplir con su deber al exigir su pago, y proceder al aseguramiento de los intereses fiscales, sin violar en nada las garantías constitucionales invocadas por los quejosos. Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion federal, se decreta: Primero: que es revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el C. Juez de Distrito de Matamoros en 20 de Agosto proximo pasado, que declaró: Que la Justicia de la Union ampara y protege á los Señores H. Nielsou, Casimiro Castro, Melchor M. Abascal, M. H. Croos, Manuel Rodriguez, Luis Vazcaya y Compania y Luanõ Barreda, contra los autos del administrador de la Aduana marítima de dicho puerto, que los aseguró efectos y les exigió el pago de derechos de bultos mencionado. Segundo: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los mismos Señores, contra dichos actos, por no haberse violado con estos, las garantías de los artículos constitucionales que invocan los quejosos.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que los elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archíveze á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*J. M. Lozano.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Ndjera.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Ilanla*, secretario.

Es copia que certifico. México, Diciembre 24 de 1878.—*Lic. Emilio Ordáz*, oficial mayor interino.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro, por el C. Ramon O. Feliú, como apoderado del Señor su padre D. Hermenegildo Feliú, contra el decreto número 172 de la Legislatura de ese Estado, en la parte que establece el cobro de alcabalas sobre los efectos del país que se introduzcan al referido Estado de Querétaro.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que la cuestion sometida al fallo de V. es meramente de derecho; pues se reduce á saber si pugna ó no con la letra de la Constitucion, el decreto número 72 de la Legislatura de Querétaro, que previene se continúe cobrando el impuesto conocido bajo el nombre de alcabala,

Desde luego salta á la vista, que por el artículo 124 de dicha Constitucion, se ha mandado lo siguiente: "Para el día 1º de Junio de 1858, quedarán abolidas las alcabalas y aduanas interiores en toda la República." El 126 dice: "Esta Constitucion las leyes del Congreso de la Union que emanen de ella, y todos los tratados hechos ó que se hicieren por el Presidente de la República con aprobacion del Congreso, serán la ley suprema de toda la Union. Los jueces de cada Estado se arreglarán á dicha Constitucion, leyes y tratados, á pesar de las disposiciones en contrario, que pueda haber en las Constituciones ó leyes de los Estados."

Como para exigir á Don Hermenegildo Feliú el pago de alcabala, no puede haber autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento que se tenga que iniciar, por estar prohibido ese pago como se ha visto, es claro que no puede hacerse efectivo sin abierta violacion de la garantía reconocida por el artículo 16: Y sien-